



Asamblea General

Distr. general
10 de agosto de 2022
Español
Original: inglés

Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 69 c) del programa provisional**

**Promoción y protección de los derechos humanos:
situaciones de los derechos humanos e informes de
relatores y representantes especiales**

Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible***

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, presentado de conformidad con la resolución [46/7](#) del Consejo de Derechos Humanos.

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 24 de octubre de 2022.

** [A/77/150](#).

*** Este informe se presentó después del plazo límite para reflejar los acontecimientos más recientes.



Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd

El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: un catalizador para acelerar la acción a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Resumen

En el presente informe, el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, pone en tela de juicio la idea comúnmente aceptada de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen meras aspiraciones poniendo de relieve las amplias obligaciones de derechos humanos que subyacen a dichos Objetivos. Este malentendido crucial de los Objetivos como una aspiración es una razón fundamental del fracaso de los avances hacia su consecución. Se considera que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, recientemente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, es un catalizador para los cambios sistémicos y el progreso acelerado hacia el logro de los Objetivos. El Relator Especial detalla las etapas necesarias para aplicar un enfoque basado en los derechos a la emergencia climática, el colapso de la biodiversidad, la contaminación tóxica generalizada y los Objetivos. El Relator Especial también identifica fuentes de recursos para subsanar el déficit de financiación con respecto a los Objetivos, muestra buenas prácticas y formula recomendaciones sobre cómo los Estados y las empresas pueden alcanzar los Objetivos, no dejar a nadie atrás y cumplir sus obligaciones y responsabilidades relativas al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

I. Introducción

1. La economía mundial está quebrada. Se basa en dos pilares, a saber, la explotación de las personas y la explotación del planeta, que son fundamentalmente injustos, insostenibles e incompatibles con el pleno disfrute de los derechos humanos. Este es el núcleo del predicamento humano y, aunque las pandemias y las guerras son acontecimientos destructivos y devastadores, son distracciones pasajeras comparadas con la pobreza extrema, la desigualdad grotesca y la catástrofe ambiental que amenazan con torpedear nuestro futuro.

2. La contaminación causa una muerte prematura cada cuatro segundos. Los diez hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres, y los 20 multimillonarios más ricos generan 8.000 veces más contaminación por carbono que los 1.000 millones de personas más pobres juntas¹.

3. En respuesta a estas crisis mundiales interrelacionadas, las Naciones Unidas llevaron a cabo la consulta pública más amplia de la historia, que llegó a casi 10 millones de personas, y, en 2015, aprobaron un marco internacional titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (resolución 70/1 de la Asamblea General). La Agenda 2030 incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, destinados a “poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”.

4. Los derechos humanos están en el centro de esta visión, incluidas las promesas de no dejar a nadie atrás y de llegar primero a los más rezagados. Al aprobar la Agenda 2030, los Estados Miembros abogaron por un enfoque basado en los derechos y fundamentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos, y concibieron un mundo en el que fuera universal el respeto a los derechos humanos. En su declaración ante el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Vicesecretaria General afirmó que “los derechos humanos son una parte intrínseca del desarrollo sostenible —y el desarrollo sostenible es un poderoso vehículo para la realización de todos los derechos humanos”.

5. Lamentablemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron sabotados por no vincularlos explícitamente a obligaciones de derechos humanos jurídicamente exigibles. Un informe elaborado por el Equipo de Apoyo Técnico del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible recomendó que cada Objetivo se refiriera explícitamente a las normas de derechos humanos correspondientes, de manera que se extrajera y reforzara el contenido real de esos derechos reconocidos en el derecho internacional². El Equipo de Apoyo Técnico también recomendó que las metas se adecuaran de forma estrecha y explícita a sus correspondientes normas de derechos humanos. Los Estados rechazaron esta orientación. En los Objetivos solo figura un puñado de referencias explícitas a los derechos humanos y no se mencionan los derechos a la alimentación, al agua, a la salud, a un nivel de vida adecuado o a un medio ambiente saludable. Los críticos observaron que “es probable que el deseo de evitar un sistema sólido de rendición de cuentas haya motivado que los Miembros [de las Naciones Unidas] opten por no

¹ Oxfam Internacional, *Inequality Kills* (Oxford, 2022).

² Naciones Unidas, Equipo de Apoyo Técnico del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, *Compendium of TST Issues Briefs*, Issues Brief 18: Human rights, including the right to development, págs. 139 a 146.

enmarcar los [Objetivos de Desarrollo Sostenible] explícitamente en términos de obligaciones jurídicas de derechos humanos”³.

6. El mayor problema no son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sí mismos, sino la forma en que los Estados los perciben y los presentan como meras aspiraciones, cuando en realidad los Objetivos están contruidos sobre una base sólida constituida por el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional del medio ambiente, que son jurídicamente vinculantes y aplicables. Los Objetivos no pueden transformar por arte de magia las obligaciones jurídicamente vinculantes en promesas políticas inaplicables. La ausencia de normas explícitas de derechos humanos en los Objetivos y las metas ha tenido una repercusión negativa tanto en la agenda internacional de derechos humanos como en la de desarrollo sostenible.

7. Según el Instituto Danés de Derechos Humanos, hay obligaciones de derechos humanos que subyacen a todos los Objetivos y al 93 % de las metas (157 de 169)⁴. Por ejemplo, el Objetivo 7, relativo a la energía asequible y limpia, está conectado con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25, párr. 1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11, párr. 1), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5 e)), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24, párr. 2 c)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14, párr. 2 h)), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28, párr. 1), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 22, párr. 2, y art. 24), el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (art. xviii, párr. 2 b)), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Protocolo de San Salvador) (art. 11), la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (la Convención de Aarhus) (art. 1), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú) (arts. 1 y 4), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (arts. 25 y 32) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (arts. 5 y 18).

8. A medida que la humanidad se acerca al punto medio entre 2015 y 2030, es esencial comprender los derechos humanos que subyacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las correspondientes obligaciones y responsabilidades de los Estados y las empresas para aliviar las injusticias ambientales, subsanar el déficit de financiación con respecto a los Objetivos y acelerar el progreso hacia su consecución. Como señaló el Secretario General al hacer su llamamiento a la acción para 2020, titulado “La aspiración más elevada: llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”:

Cuando se aborda el desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, los resultados son más sostenibles, sólidos y eficaces. Por ello, estos derechos impregnan toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se sustentan en los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como en el derecho al desarrollo⁵.

³ Véase Gillian MacNaughton “The mysterious disappearance of human rights in the 2030 development agenda”, en *Interdisciplinary Approaches to Human Rights*, E. H. Chowdhury y R. Srikanth, eds. (Abingdon y Nueva York, Routledge, 2019).

⁴ Véase <https://sdgdata.humanrights.dk/en/node/252884>.

⁵ Véase https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_SPA.pdf.

9. En 2021, el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato del Relator Especial y le solicitó que procurara determinar los problemas y los obstáculos que dificultaban el pleno cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible y las deficiencias de protección en ese ámbito, en particular en el contexto del desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (resolución 46/7).

10. Para preparar el presente informe, en marzo de 2022 se difundió un llamamiento a presentar contribuciones. Se recibieron respuestas de la Arabia Saudita, Argelia, Australia, Azerbaiyán, Colombia, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Estonia, la Federación de Rusia, Grecia, Guatemala, Italia, Kenya, Mauricio, México, Portugal, Qatar, Sudán del Sur, el Togo, Vanuatu y la Unión Europea, así como de organizaciones de la sociedad civil⁶. En junio se celebró una consulta con expertos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos del Centre for International Sustainable Development Law. El presente informe se centra en el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y en el potencial transformador de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

II. Actualización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el mundo se dirige a un fracaso catastrófico

11. A medida que nos acercamos al punto medio entre 2015 y 2030, cualquier esperanza de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible se desvanece como un espejismo. En 2019, antes de la pandemia, la Vicesecretaria General advirtió de que “nos hemos desviado de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y que “se necesita urgentemente una respuesta más profunda, más ambiciosa, más transformadora y más integrada para volver a tomar el buen rumbo”⁷. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llegó a la misma conclusión⁸. La pandemia ha empeorado mucho la situación. En 2021, por segundo año consecutivo, el mundo no logró avanzar en la consecución de los Objetivos⁹. En 2022, el Secretario General observó que “se han detenido o revertido años o incluso décadas de progreso en materia de desarrollo” (véase E/2022/55, párr. 2). Ningún Estado está en vías de cumplir todos los Objetivos. Es probable que la mayoría de los Estados no alcancen la gran mayoría de las metas, especialmente las que se centran en el medio ambiente. Una de las principales razones por las que los Estados no adoptan las medidas audaces y transformadoras que tanto se necesitan es que los Objetivos se interpretan erróneamente como aspiraciones y no como obligaciones.

12. Excepto cuando se indica lo contrario, los siguientes datos proceden del informe del Secretario General sobre los progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (E/2022/55).

⁶ Véase <https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-inputs-human-rights-transformative-actions-and-un-sustainable-development>.

⁷ Naciones Unidas, “Sustainable development reports underscore need for robust action on means of implementation, Deputy Secretary-General stresses at briefing”, comunicado de prensa, 22 de mayo de 2019.

⁸ Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), *Measuring Distance to the SDG Targets 2019: An Assessment of Where OECD Countries Stand* (París, 2019).

⁹ Jeffrey D. Sachs y otros, *Sustainable Development Report 2022: From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond* (de próxima publicación).

Objetivos 2 y 6: alimentos y agua

13. Los niveles de hambre, que habían disminuido durante años, comenzaron a aumentar de nuevo en 2015, un retroceso impulsado por el cambio climático, los conflictos y la desigualdad económica. Entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en 2021, mientras que 3.100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable y equilibrada¹⁰. Uno de cada cinco niños sufre retraso del crecimiento debido a una nutrición inadecuada.

14. Se han producido avances relacionados con el agua y el saneamiento, pero 2.000 millones de personas siguen sin tener acceso a agua potable gestionada de forma segura, mientras que 3.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Miles de millones de personas seguirán careciendo de acceso a estos servicios básicos en 2030, a menos que se cuadruplique inmediatamente el ritmo de progreso. Más de 2.300 millones de personas viven en naciones con estrés hídrico, una cifra que va en aumento debido a la crisis climática, el crecimiento de la población y el creciente uso del agua en la agricultura y la industria.

Objetivos 7 y 13: energía limpia y acción climática

15. Una de cada tres personas (2.600 millones) sigue utilizando sistemas para cocinar que generan enormes niveles de contaminación atmosférica, lo que perjudica su salud. La mayoría de los que no tienen acceso a cocinas y combustibles limpios viven en Asia y África. Alrededor de 750 millones de personas (1 de cada 10) carecen de acceso a la electricidad, sobre todo en el África Subsahariana. Aunque millones de personas obtienen acceso cada año, el ritmo de progreso debe duplicarse para alcanzar la meta de 2030, lo que plantea grandes dificultades en los Estados de ingreso bajo, frágiles y devastados por los conflictos.

16. En 2021, la demanda de carbón, petróleo y gas se disparó, lo que hizo que las emisiones mundiales de CO₂ relacionadas con la energía aumentaran un 6,0 % y llegaran a un máximo histórico de 36.300 millones de toneladas métricas. Los combustibles fósiles siguen proporcionando más del 80 % de la energía mundial. Sobre la base de los compromisos nacionales actuales, se prevé que las emisiones mundiales aumenten un 14 % para 2030. Las cifras que se han ido registrando indican que no se cumplirán muchos compromisos nacionales, lo que significa que el incremento de las emisiones será probablemente aún mayor. Los flujos financieros internacionales destinados a apoyar la energía limpia y renovable en los países en desarrollo fueron de unos míseros 10.900 millones de dólares en 2019, un 23,6 % menos que en 2018, lo que pone de manifiesto que el declive era anterior a la pandemia y que el nivel de financiación es manifiestamente insuficiente.

Objetivos 3, 11 y 12: buena salud, ciudades sostenibles y producción y consumo responsables

17. Nueve de cada diez personas viven en zonas donde la calidad del aire no cumple las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ningún Estado cumple la nueva directriz anual de la OMS de 5µg/m³ para el material particulado (MP_{2,5}) ambiental¹¹. Los efectos de la exposición a la contaminación atmosférica sobre la salud reducen la esperanza media de vida en dos años a nivel

¹⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa Mundial de Alimentos y Organización Mundial de la Salud, *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles* (Roma, 2022).

¹¹ Health Effects Institute, *How Does Your Air Measure Up Against the WHO Air Quality Guidelines? A State of Global Air Special Analysis* (Boston, 2022).

mundial y hasta diez años para los residentes de algunas ciudades de la India¹². Si no se avanza, más de 70 millones de personas morirán prematuramente en los próximos ocho años a causa de la contaminación atmosférica, el agua contaminada y la exposición a sustancias tóxicas, incluidos 5 millones de niños menores de 5 años.

18. Más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales en las ciudades y sus alrededores carecen de un acceso fiable al agua, el saneamiento, la electricidad o la gestión de los residuos sólidos. De aquí a 2050, las ciudades del mundo contarán con 2.500 millones de personas más y casi el 90 % de este aumento se producirá en África y Asia, lo que supondrá una presión incommensurable para una infraestructura y unos servicios que ya están al límite.

19. La huella material mundial aumentó un 70 % entre 2000 y 2017¹³. Cada minuto se compraron más de 1 millón de botellas de plástico para beber y se tiraron más de 9 millones de bolsas de plástico desechables. A nivel mundial, menos del 10 % de los materiales reciclables se reciclan, mientras que la gran mayoría acaba en los vertederos o en el medio ambiente.

Objetivos 14 y 15: vida submarina y de los ecosistemas terrestres

20. La biodiversidad está en declive. Las poblaciones de fauna y flora silvestres han disminuido un 70 % desde 1970. Se estima que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. El mundo ha perdido 100 millones de hectáreas de bosque desde 2000. Entre 1970 y 2015, los humedales del mundo se redujeron un 35 %. Dicha reducción está incluida en la disminución del 85 % registrada en los últimos 300 años. Las zonas muertas, que son zonas del océano que, debido a la contaminación, carecen de oxígeno suficiente para sustentar la vida, pasaron de 400 en 2008 a 700 en 2019. Más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos para su subsistencia, pero los ecosistemas marinos se están degradando por la contaminación, el plástico, la sobrepesca, la eutrofización, la acidificación y el aumento de las temperaturas.

No dejar a nadie atrás

21. Un examen de los informes de los Estados sobre sus esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible puso de manifiesto que los Gobiernos no comprenden las conexiones entre el cambio climático, la degradación ambiental y la promesa de no dejar a nadie atrás¹⁴. La frase “no dejar a nadie atrás” suele discutirse en el contexto de acabar con la pobreza y el hambre. Sin embargo, las personas también se están quedando atrás porque viven en zonas de sacrificio, que soportan una carga desproporcionada de los efectos de los residuos, la contaminación, la crisis climática y el colapso de la biodiversidad, así como porque carecen de acceso a agua limpia, a un saneamiento adecuado, a una correcta gestión de los residuos, a electricidad limpia y a espacios verdes públicos.

III. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

22. Frente a este sombrío panorama, el reciente reconocimiento del derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, tanto por parte del Consejo de Derechos Humanos (resolución 48/13) como de la Asamblea General

¹² Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, Air Quality Life Index. Se puede consultar en <https://aqli.epic.uchicago.edu>.

¹³ Naciones Unidas, *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021*.

¹⁴ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *2020 Voluntary National Reviews Synthesis Report*.

(resolución [76/300](#)), es un rayo de esperanza. El reconocimiento de este derecho humano fundamental, que no había sido reconocido anteriormente por las Naciones Unidas, pone de manifiesto el potencial transformador de adoptar un enfoque basado en los derechos para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

23. El derecho a un medio ambiente saludable está incluido explícitamente en los tratados regionales ratificados por 133 Estados. Esto incluye 53 partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 46 partes en la Convención de Aarhus, 17 partes en el Protocolo de San Salvador, 13 partes en el Acuerdo de Escazú y 16 Estados partes en la Carta Árabe de Derechos Humanos¹⁵. Diez Estados aprobaron la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, pero no se incluyen en el total porque la Declaración no es vinculante.

24. El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible goza de protección constitucional en 110 Estados. La protección constitucional de los derechos humanos es esencial porque las constituciones representan la norma suprema y con mayor fuerza de los ordenamientos jurídicos nacionales. Además, las constituciones desempeñan un importante papel cultural, ya que reflejan los valores y aspiraciones más profundos y apreciados de una sociedad.

25. Se debería promulgar y aplicar una legislación que respete, proteja y haga efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Hay más de 100 Estados en los que este derecho se ha incorporado a la legislación nacional. En la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Francia, Portugal y Sudáfrica, el derecho a un medio ambiente saludable es un principio unificador que impregna la legislación, los reglamentos y las políticas (véase [A/HRC/43/53](#)).

26. En total, más del 80 % de los Estados Miembros (156 de 193) reconocen legalmente el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y establecen deberes vinculantes para los Gobiernos. En los últimos cuatro años, el Relator Especial ha elaborado una serie de informes temáticos en los que se describen los elementos sustantivos de este derecho, incluidos el aire limpio ([A/HRC/40/55](#)), un clima seguro ([A/74/161](#)), los ecosistemas saludables y la biodiversidad ([A/75/161](#)), la disponibilidad de agua potable en cantidad suficiente ([A/HRC/46/28](#)), alimentos sanos y sostenibles ([A/76/179](#)) y un medio ambiente no tóxico ([A/HRC/49/53](#)).

27. Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están claramente relacionados con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, incluidos el agua limpia y el saneamiento (Objetivo 6), la energía asequible y limpia (Objetivo 7), las ciudades y comunidades sostenibles (Objetivo 11), el consumo y la producción responsables (Objetivo 12), la acción climática (Objetivo 13), la vida submarina (Objetivo 14) y la vida en los ecosistemas terrestres (Objetivo 15). Otros Objetivos cubren una amplia gama de cuestiones, incluidas la pobreza, la salud y la educación, pero cada Objetivo incorpora metas directamente relacionadas con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como demuestran los siguientes ejemplos:

¹⁵ Algunos Estados son partes en múltiples acuerdos regionales, por lo que el total es menor que la suma de las partes en los acuerdos individuales. La Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y el Uruguay son partes en el Protocolo de San Salvador y en el Acuerdo de Escazú. Argelia, Egipto, Libia, Mauritania y el Sudán son partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en la Carta Árabe de Derechos Humanos.

<i>Objetivo de Desarrollo Sostenible</i>	<i>Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible</i>
Objetivo 1: Fin de la pobreza	1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales
Objetivo 2: Hambre cero	2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
Objetivo 3: Salud y bienestar	3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo
Objetivo 4: Educación de calidad	4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
Objetivo 5: Igualdad de género	5.a Empezar reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico	8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras	9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente

<i>Objetivo de Desarrollo Sostenible</i>	<i>Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible</i>
	racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades	10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas	16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Objetivo 17: Alianzas para lograr los Objetivos	17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

28. Existen importantes interconexiones y sinergias entre todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la gestión de la naturaleza promueve la igualdad (Objetivos 5 y 10) y reduce la vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático, la degradación ambiental y el riesgo de desastres, al tiempo que mejora los resultados relacionados con el agua, el clima y la biodiversidad (Objetivos 6, 13, 14 y 15). El derecho a la educación, incluido el acceso a la educación ambiental y a la formación en competencias ecológicas (Objetivo 4), es fundamental para la producción y el consumo responsables (Objetivo 12), la acción climática (Objetivo 13) y las acciones necesarias para proteger y restaurar la vida en la Tierra (Objetivos 14 y 15).

29. En el anexo I figura una lista completa de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos conexos¹⁶. Un requisito previo para lograr los Objetivos es respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, mientras que la consecución de los Objetivos puede hacer avanzar la realización de este derecho.

¹⁶ El anexo I se puede consultar en <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-environment/annual-thematic-reports-special-rapporteur-human-rights-and-environment>.

IV. Enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basado en los derechos humanos

30. Un enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basado en los derechos humanos rechaza la suposición de que los Objetivos son meras promesas políticas, porque todos y cada uno de los Objetivos están contruidos sobre una base sólida de derechos humanos reconocidos internacionalmente, que establecen obligaciones exigibles para los Estados. Los Objetivos no pueden contradecir ni menoscabar (en su contenido o su alcance o la urgencia que haya de lograrlos) las obligaciones correspondientes al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y a otros derechos humanos estrechamente vinculados a la Agenda 2030.

31. Habida cuenta de que los Objetivos están tan profundamente arraigados en los derechos humanos, no hay otra opción viable que aplicar un enfoque basado en los derechos a los esfuerzos por lograr dichos Objetivos. La legislación sobre derechos humanos define las funciones de los titulares de derechos (personas y grupos con reclamaciones válidas en materia de derechos humanos) y de los titulares de obligaciones (actores estatales y no estatales con las correspondientes obligaciones de respetar, proteger o hacer efectivos los derechos humanos). La aplicación de un enfoque basado en los derechos pone un rostro humano a la triple crisis ambiental, da prioridad a la mejora de las condiciones de los más pobres y vulnerables, resalta la necesidad de crear capacidad (tanto de los titulares de derechos como de los titulares de obligaciones), cataliza una acción ambiciosa, aumenta la rendición de cuentas y empodera a las personas, especialmente de las comunidades desfavorecidas, para que participen en el diseño y la aplicación de soluciones. Por tanto, el enfoque basado en los derechos humanos es la manera más potente de garantizar que nadie se quede atrás.

32. Para aplicar un enfoque basado en los derechos, todas las leyes, políticas, planes, proyectos y programas relacionados con los Objetivos, así como los procesos para desarrollar esas acciones, deben guiarse por las normas, estándares y principios de los derechos humanos. Los principios de realización progresiva, igualdad, no discriminación, participación, rendición de cuentas, prevención y no regresión constituyen el núcleo del enfoque basado en los derechos.

Realización progresiva

33. El disfrute pleno y efectivo del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está sujeto a una realización progresiva, aunque algunas obligaciones específicas son de efecto inmediato, como la no discriminación, la no regresión y la exigencia de tomar medidas para promover el derecho. Los Estados deben adoptar medidas deliberadas, concretas y selectivas (obligación de exigibilidad inmediata) para lograr el disfrute pleno y efectivo del derecho en cuestión (obligación de resultado condicionada a la mejora gradual, progresiva y continua). La obligación de la realización progresiva requiere que el Estado elabore estrategias, planes o políticas con indicadores y criterios que permitan el seguimiento de los progresos realizados. Para lograr que los derechos humanos sean efectivos, los Estados están obligados a utilizar al máximo los recursos financieros, naturales, humanos, tecnológicos, institucionales y de información disponibles (véase [A/HRC/45/10](#)).

Igualdad y no discriminación

34. Todos los seres humanos se consideran iguales y tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible sin discriminación de ningún tipo, como la raza, el color, el sexo, la etnia, la edad, la lengua, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la discapacidad, la propiedad, el nacimiento u otra condición. Debe darse prioridad a que se hagan efectivos los derechos de las

personas marginadas, excluidas y más fuertemente afectadas por la desigualdad ambiental, social y económica, en particular las que se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación¹⁷. Para superar la discriminación, los datos deben desglosarse para identificar a los grupos vulnerables y marginados.

35. Los derechos humanos deben ser prioritarios en los presupuestos, y las políticas de los Estados deben favorecer a los vulnerables y marginados para garantizar que nadie se quede atrás y llegar primero a los más rezagados. El principio de no discriminación exige que los Estados hagan frente a las injusticias ambientales dando prioridad a las medidas de mitigación, adaptación, limpieza y restauración para las comunidades desfavorecidas de las zonas de sacrificio, que soportan una carga desproporcionada de los efectos de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación generalizada y tóxica (véase [A/HRC/49/53](#)).

Participación

36. Toda persona tiene derecho a participar de forma segura y significativa en la elaboración, la aplicación y la evaluación de leyes, políticas, programas y otras acciones que tengan implicaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el clima y el medio ambiente, y a contribuir a ello. La participación empodera a las comunidades marginadas para efectuar el cambio, mejora la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones y aumenta la posibilidad de transformación social.

Rendición de cuentas

37. Los Estados y otros titulares de obligaciones (por ejemplo, las empresas) son responsables de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Deben cumplir las normas jurídicas interconectadas consagradas en el derecho de los derechos humanos y el derecho ambiental¹⁸. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos agraviados deben tener acceso a la justicia, con recursos efectivos (véase [E/C.12/2019/1](#), párrs. 7 y 14). El acceso a la justicia puede adoptar muchas formas, incluidos los procedimientos administrativos de reclamación, las instituciones nacionales de derechos humanos y los procesos judiciales a nivel local, nacional y regional. La rendición de cuentas está estrechamente vinculada a la supervisión del cumplimiento de las normas y las metas, a la garantía de los derechos a la información y la participación y a la creación de las capacidades de los titulares de derechos para reclamarlos de forma efectiva.

Prevención y no regresión

38. Es primordial prevenir las violaciones y abusos de los derechos humanos. Los Estados deberían adoptar medidas para reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger y restaurar la biodiversidad y lograr la contaminación y los residuos cero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que, para que los Estados hagan efectivo el derecho a un medio ambiente saludable, el cumplimiento del deber de prevención requiere la existencia de un marco regulatorio sólido y un sistema coherente de supervisión y vigilancia¹⁹. El Comité de

¹⁷ Véanse las directrices operacionales sobre la inclusión de los afrodescendientes en la Agenda 2030, aprobadas por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes el 9 de diciembre de 2020.

¹⁸ Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), relativa al derecho a la vida, párr. 62.

¹⁹ Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso núm. 12.718: *Comunidad de La Oroya, Perú*, informe núm. 330/20, noviembre de 2021, párr. 169.

Derechos Humanos llegó a una conclusión similar²⁰. Los Estados deberían promulgar leyes que exijan a las empresas que contribuyen al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación y a otras formas de degradación ambiental que actúen con una diligencia debida inclusiva y rigurosa en materia de derechos humanos y medio ambiente²¹.

39. Los Estados deben aprobar leyes, políticas y normas ambientales con base científica, fundamentadas en la orientación internacional de organizaciones como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Una vez establecido, el principio de no regresión significa que los Estados no pueden ignorar o debilitar las normas sin una justificación convincente. La regresión incumple la obligación de los Estados de garantizar el desarrollo progresivo del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que no estaba justificado debilitar las normas nacionales de calidad del aire y que ello incumplía las obligaciones de derechos humanos²².

Principios del derecho internacional del medio ambiente

40. Además de los principios anteriores, procedentes del derecho de los derechos humanos, las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también deberían guiarse por los principios de precaución y de que quien contamina paga, procedentes del derecho internacional del medio ambiente. Los conocimientos sobre el cambio climático, la biodiversidad y las sustancias tóxicas nunca serán completos, por lo que es necesario recurrir al principio de precaución, que sostiene que, cuando hay amenazas de daños para la salud humana o el medio ambiente, la falta de certeza científica total no debe utilizarse como razón para posponer la acción preventiva. La aplicación del principio de precaución en el contexto de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con un medio ambiente saludable ha sido respaldada por el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos²³.

Obligaciones de los Estados

41. Los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente especifican las tres categorías de obligaciones de los Estados que son pertinentes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: obligaciones procesales, obligaciones sustantivas y obligaciones especiales respecto de quienes se encuentran en situaciones vulnerables (véase [A/HRC/37/59](#), anexo). Al esforzarse por cumplir sus deberes relacionados con los Objetivos, los Estados tienen las siguientes obligaciones procesales:

- a) Proporcionar al público información accesible, asequible y comprensible sobre las causas y consecuencias de la crisis ambiental mundial, incluso incorporando

²⁰ Comité de Derechos Humanos, *Portillo Cáceres y otros c. Paraguay* (2019) (CCPR/C/126/D/2751/2016).

²¹ Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, “Essential elements of effective and equitable human rights and environmental due diligence legislation”, *Policy Brief No. 3*.

²² Véase Comisión Interamericana, *La Oroya*, párr. 188.

²³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-23/17 (2018); Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), relativa al derecho a la vida; y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Tatar v. Romania*, sentencia de la sala de 27 de enero de 2009.

la importancia de un clima seguro y unos ecosistemas saludables en los planes de estudios educativos en todos los niveles;

b) Establecer programas de seguimiento, evaluar las principales causas de los daños al clima, la biodiversidad y el medio ambiente, y utilizar los mejores conocimientos científicos disponibles para elaborar leyes, reglamentos, normas y políticas (véase [A/HRC/48/61](#));

c) Asegurar un enfoque inclusivo, equitativo y que responda a las cuestiones de género para la participación pública en todas las medidas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el clima, la biodiversidad y la protección ambiental, con especial énfasis en el empoderamiento de las poblaciones más directamente afectadas²⁴;

d) Integrar la igualdad de género en todas las leyes, planes, presupuestos, políticas y acciones, y empoderar a las mujeres para que desempeñen funciones de liderazgo a todos los niveles²⁵;

e) Facilitar un acceso asequible y oportuno a la justicia y a recursos efectivos para todos a fin de que los Estados y las empresas rindan cuentas del cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible;

f) Llevar a cabo evaluaciones independientes, tanto *ex ante* como *ex post facto*, de los posibles efectos ambientales, sociales, culturales y en materia de derechos humanos de todos los planes, políticas y propuestas que puedan contribuir previsiblemente a la crisis climática, dañar, destruir o disminuir los ecosistemas y la biodiversidad, o provocar contaminación o la exposición a sustancias tóxicas, prestando especial atención a los efectos transfronterizos o colaterales en los países en desarrollo;

g) Aplicar las salvaguardias de los derechos humanos en el diseño y la utilización de mecanismos innovadores de financiación (por ejemplo, pagos por los servicios de los ecosistemas, bonos asociados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, canje de deuda por medidas de protección ambiental y canje de deuda por adaptación climática);

h) Respetar los derechos de los pueblos indígenas, los campesinos y las comunidades locales en todas las medidas destinadas a la conservación, protección, restauración, utilización sostenible y distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad y los ecosistemas saludables, lo que incluye respetar los conocimientos tradicionales, las prácticas consuetudinarias y el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado;

i) Proteger a los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente frente a la intimidación, la criminalización y la violencia, investigar, enjuiciar y castigar con diligencia a los autores de esos delitos y abordar las causas profundas de los conflictos socioambientales;

j) Promover y proteger el espacio cívico sobre la base de los derechos a la participación y a la libertad de expresión, asociación y reunión.

42. Las obligaciones sustantivas derivadas del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible se analizan en informes anteriores del Relator Especial,

²⁴ Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general núm. 37 sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático ([CEDAW/C/GC/37](#)).

²⁵ Véase [E/2022/27-E/CN.6/2022/16](#), cap. I, párr. 1.

incluidos los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Los Estados deben tomar medidas inmediatas y ambiciosas basadas en los derechos para:

- a) Mejorar la calidad del aire reduciendo la contaminación tanto del aire exterior como del aire en los hogares ([A/HRC/40/55](#));
- b) Garantizar que todo el mundo tenga acceso a agua potable en cantidad suficiente ([A/HRC/46/28](#));
- c) Transformar la agricultura industrial para producir alimentos sanos y sostenibles ([A/76/179](#));
- d) Eliminar de manera progresiva el uso de carbón, petróleo y gas natural invirtiendo en energía renovable, almacenamiento de energía y eficiencia energética, y ayudar a las naciones vulnerables al clima a adaptarse a la emergencia climática ([A/74/161](#));
- e) Conservar, proteger y restaurar la biodiversidad ([A/75/161](#));
- f) Desintoxicar el organismo de las personas y el planeta ([A/HRC/49/53](#)).

43. Muchos grupos diferentes son particularmente vulnerables a los daños climáticos y ambientales, como los niños, las mujeres, las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y *queer*, las personas mayores, los pueblos indígenas, los campesinos, los refugiados, los desplazados internos y los migrantes. A fin de no dejar a nadie atrás, los Estados deben dar prioridad a las acciones destinadas a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para esos grupos.

44. Los niños son un buen ejemplo de población vulnerable por su singular sensibilidad a los efectos adversos del cambio climático y la exposición a sustancias tóxicas. En el art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige que los Estados partes suministren alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Sin embargo, más de un millón de muertes prematuras de niños menores de 5 años son causadas anualmente por la contaminación y las sustancias tóxicas. Según el Comité de los Derechos del Niño, si se identifica a niños que son víctimas de la degradación ambiental, todas las partes pertinentes deben adoptar medidas inmediatas para evitar mayores daños a la salud y el desarrollo de esos niños y reparar los daños causados²⁶. Los Estados tienen el deber de tomar en consideración el interés superior del niño al adoptar decisiones que puedan afectarlo, y un clima seguro, ecosistemas saludables y entornos no tóxicos son elementos inequívocamente fundamentales para dicho interés superior. Es crucial lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar que todos los niños disfruten de su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

V. Etapas de un enfoque basado en los derechos humanos

45. Todas las acciones dirigidas a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua, la contaminación, la transformación del sistema alimentario y la propagación de enfermedades zoonóticas deberían aplicar un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en que se haga efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Las etapas necesarias para aplicar este enfoque incluyen:

²⁶ Véase Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño (2013), párr. 31.

llevar a cabo un análisis de la situación; determinar los grupos vulnerables; analizar y fortalecer las disposiciones jurídicas pertinentes; elaborar estrategias y planes de acción; aplicar y ejecutar (incluida la creación de capacidad); y evaluar los progresos.

Análisis de la situación

46. La primera etapa en la aplicación de un enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basado en los derechos humanos en el contexto del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible conlleva realizar un análisis de la situación, para lo cual se reúnen y analizan datos relativos a la calidad del aire, la calidad y la cantidad del agua, la sostenibilidad del sistema alimentario, las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción de sustancias químicas, las emanaciones y las exposiciones, y las poblaciones de fauna y flora silvestres y de hongos (y el estado de los ecosistemas en los que viven). Es vital hacer un seguimiento de los efectos adversos para la salud (como la mortalidad prematura, las enfermedades de transmisión hídrica y las enfermedades respiratorias) causados por diversos tipos de degradación ambiental, así como de los niveles de acceso a los servicios ambientales (como el agua limpia, el saneamiento, la gestión de residuos y los espacios verdes públicos). La información y los datos de referencia sobre las tendencias son esenciales para determinar las prioridades y fundamentar la elaboración de políticas. También es importante evaluar los principales factores que contribuyen a los daños y peligros ambientales. Por ejemplo, en algunos Estados la mayor parte de la contaminación atmosférica procede de la quema de carbón para producir electricidad, mientras que en otros Estados el transporte basado en los combustibles fósiles es el principal factor que contribuye a dicha contaminación.

Detectar a los titulares de derechos vulnerables

47. Una segunda etapa, como ha puesto de relieve sistemáticamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consiste en detectar y priorizar las necesidades de los titulares de derechos (personas y grupos) que son desfavorecidos y vulnerables a las formas sistémicas e interseccionales de discriminación (véase [E/C.12/2019/1](#), párrs. 7 y 14). En muchos Estados, existen lagunas de información que pueden impedir que algunos grupos sean identificados como vulnerables o marginados. Los datos desglosados (por sexo, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en el contexto nacional) son vitales para garantizar que nadie se quede atrás. Los estudios indican que las variables raciales y étnicas se han ignorado en gran medida en los primeros años de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de que la discriminación racial y étnica se encuentra entre las formas más prevalentes y persistentes de discriminación²⁷. Los Estados no solo deberían identificar a los grupos vulnerables, sino también determinar las causas inmediatas, subyacentes y estructurales por las que no se hacen efectivos los derechos. También hay que identificar a los titulares de obligaciones (actores tanto estatales como no estatales) y aclarar sus deberes y responsabilidades.

Análisis de la legislación y las políticas

48. La tercera etapa consiste en analizar la legislación y las políticas para cerciorarse de que el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como los derechos conexos, por ejemplo, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda y un nivel de vida adecuado, están reconocidos en las constituciones nacionales y subnacionales e incorporados en las leyes, los

²⁷ I. T. Winkler y M. L. Satterthwaite, “Leaving No One Behind? Persistent Inequalities in the SDGs”, *International Journal of Human Rights*, vol. 21, núm. 8 (julio de 2017), pág. 1074.

reglamentos, las normas y las políticas. Un buen ejemplo son las leyes de evaluación del impacto ambiental, que se han promulgado en casi todos los Estados. Deberían modificarse todas las leyes de evaluación del impacto ambiental para exigir que las evaluaciones del impacto en los derechos humanos se integren en los proyectos, políticas y planes propuestos. Una hoja de ruta jurídica nacional es una herramienta útil para detectar las lagunas y los puntos débiles de la legislación y las políticas, proporcionar orientación sobre los procesos basados en los derechos y elaborar un calendario para subsanar las lagunas y remediar los puntos débiles. La legislación y las políticas deberían abordar la dinámica del poder y las causas profundas de las violaciones de los derechos humanos, no solo los síntomas.

49. Los Estados tienen la obligación de establecer y mantener normas ambientales sustantivas que no sean discriminatorias ni regresivas y que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos. Por ejemplo, los Estados deberían incorporar, como normas nacionales jurídicamente vinculantes, las directrices de la OMS sobre la calidad del aire, la calidad del agua potable y las sustancias químicas tóxicas²⁸. Desde la perspectiva del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, es inaceptable que hasta 80 Estados no tengan normas de calidad del aire (véase [A/HRC/40/55](#)). Las normas nacionales deben tener en cuenta el interés superior del niño²⁹.

Estrategias y planes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible

50. En la cuarta etapa, todos los Estados deberían elaborar una estrategia o plan de acción global basado en los derechos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incorpore diversas estrategias y planes de acción relativos a la calidad del aire, el agua, los alimentos, la biodiversidad, el clima, la desertificación y las sustancias químicas y los residuos. Los planes y las estrategias deben incluir objetivos e indicadores mensurables y aclarar exactamente quién es el responsable de cada acción que se ha de realizar en cada paso del proceso.

Aplicación y ejecución

51. La quinta etapa consiste en aplicar y hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las normas, las políticas, los planes y los programas determinados en las etapas anteriores. La aplicación y el cumplimiento efectivos dependen de la creación de capacidad humana, financiera e institucional, centrándose en el empoderamiento de los titulares de derechos de grupos potencialmente vulnerables y marginados. El fortalecimiento del estado de derecho en materia de medio ambiente es también una consideración clave. Por ejemplo, es importante reducir la corrupción porque esta facilita los delitos ambientales, que tienen efectos devastadores en los derechos humanos.

Seguimiento y evaluación

52. La sexta etapa requiere que los Estados evalúen los progresos y, si es necesario, refuercen las acciones para garantizar que se hacen efectivos los derechos humanos y se consiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para evaluar los progresos, son esenciales mecanismos independientes de seguimiento y rendición de cuentas. Las víctimas del incumplimiento de las obligaciones de los Estados deben tener acceso a la justicia con recursos efectivos, como ya se ha comentado. Los progresos realizados con respecto a los Objetivos se analizan por medio de los exámenes nacionales voluntarios y el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

²⁸ Véase OMS, *Compendium of WHO and Other UN Guidance on Health and Environment: 2022 Update* (Ginebra, 2022).

²⁹ Véase Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3.

Lamentablemente, los exámenes nacionales voluntarios y el foro político de alto nivel son mecanismos débiles de seguimiento y rendición de cuentas. Se basan en la presentación voluntaria de información y en breves reuniones anuales y, además, los comentarios que se formulan a los Estados son limitados. Los Estados Unidos de América, Haití, Irán (República Islámica del), Myanmar, Sudán del Sur y el Yemen son los únicos Estados que no han presentado su primer examen nacional voluntario.

53. El Relator Especial analizó los 44 exámenes nacionales voluntarios presentados al foro político de alto nivel en 2022. Aunque la mayoría de ellos (35 de 44) mencionaban los derechos humanos, no había pruebas de que ningún Estado estuviera aplicando a los Objetivos un enfoque basado en los derechos. Solo cuatro Estados (Argentina, Italia, Luxemburgo y Montenegro) mencionaron el derecho a un medio ambiente saludable. En el informe titulado *2021 Voluntary National Reviews Synthesis Report*, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, hay una serie de referencias genéricas a los derechos humanos, pero solo se elogia a tres Estados (Dinamarca, Noruega y Suecia) por realizar esfuerzos concertados para integrar los derechos humanos en su labor de desarrollo internacional. En *2022 Synthesis Report* se critica la falta de sustancia y análisis en los exámenes nacionales voluntarios y se destaca el fracaso en la aplicación de los aspectos transformadores de la Agenda 2030.

54. A diferencia de los exámenes nacionales voluntarios y del foro político de alto nivel, el sistema internacional de derechos humanos ofrece una rendición de cuentas mucho mayor. Los mecanismos de derechos humanos, incluidos el examen periódico universal, los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los procedimientos especiales, los sistemas regionales africano, europeo e interamericano de derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos ya se dedican a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que subyacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, desde que se aprobaron los Objetivos en septiembre de 2015 hasta febrero de 2022, casi la mitad de los 608 textos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos (incluidas resoluciones, decisiones y declaraciones de la Presidencia) mencionaron específicamente los Objetivos o la Agenda 2030³⁰. Los órganos de tratados de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales y el examen periódico universal han formulado miles de recomendaciones directamente relacionadas con la consecución de los Objetivos³¹.

55. El examen periódico universal es un poderoso mecanismo para evaluar los progresos de un Estado hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible³². Se trata de un proceso constructivo de revisión por pares que involucra a la sociedad civil, apoya la promoción y protección de los derechos humanos y ayuda a los Estados a crear capacidad para proteger los derechos humanos mediante la asistencia técnica y el intercambio de mejores prácticas. Entre las ventajas del examen periódico universal se encuentran su universalidad, la puntualidad en la presentación de información por parte de los Estados, la inclusión de diversos interesados, incluidos los titulares de derechos, y el hecho de que incorpora todas las normas de derechos humanos, independientemente de que un Estado haya ratificado o no un tratado concreto.

³⁰ Véase Consejo de Derechos Humanos, “The Human Rights Council and the Sustainable Development Goals: an overview” (2022).

³¹ Véase Instituto Danés de Derechos Humanos, Explorador de Datos de los ODS–Derechos Humanos. Se puede consultar en <https://sdgdata.humanrights.dk/es>.

³² Judith Bueno de Mesquita y otros, “Monitoring the Sustainable Development Goals through human rights accountability reviews”, *Boletín de la Organización Mundial de la Salud*, vol. 96, núm. 9 (2018), pág. 627.

VI. Subsanación del déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

56. Un obstáculo importante para el progreso, que está relacionado con la percepción errónea de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una aspiración, es la financiación insuficiente. Según la OCDE, para alcanzar los Objetivos de aquí a 2030, será necesaria una inversión adicional, por encima de las previsiones presupuestarias actuales, de 4,2 billones de dólares al año (33,6 billones de dólares en los próximos 8 años)³³. Más del 80 % de los Estados carecen de recursos financieros suficientes para cumplir las metas nacionales en materia de agua, saneamiento e higiene³⁴. Los fondos necesarios para una acción climática ambiciosa se miden en billones de dólares anuales, mientras que el gasto fue de solo 632.000 millones de dólares anuales en 2019 y 2020³⁵. Se espera que los costos anuales de adaptación al clima en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo se sitúen entre 155.000 y 330.000 millones de dólares en 2030, pero los Estados ricos aún no han cumplido su antigua promesa de movilizar al menos 100.000 millones de dólares en financiación relacionada con el clima para esos países, y la mayor parte de la financiación ha llegado en forma de préstamos, no de subvenciones³⁶. Para poner en contexto estas cifras aparentemente abrumadoras, los Estados ricos gastaron más de 17 billones de dólares para responder a la pandemia de COVID-19, y el total de activos financieros en manos de bancos, inversionistas institucionales y gestores de activos en los Estados ricos está valorado en más de 378 billones de dólares³⁷.

57. Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueran meras aspiraciones, los Estados tendrían una discrecionalidad infinita respecto a la financiación de la labor para lograrlos. Sin embargo, dado que los Objetivos se basan en obligaciones de derechos humanos, los Estados deben dedicar el máximo de recursos disponibles a su consecución y dar prioridad a los derechos humanos en la elaboración de políticas fiscales y presupuestos³⁸.

58. Los problemas estructurales de la economía mundial son un gran impedimento para la consecución de los Objetivos y el goce efectivo de los derechos humanos. Entre estos problemas figuran los astronómicos niveles de endeudamiento y los costos del servicio de la deuda, además de las dificultades que encuentran los países de ingreso bajo para acceder a una financiación adecuada; las subvenciones masivas a los combustibles fósiles y otras industrias destructivas; la evasión y la elusión fiscales; los tratados internacionales de inversión y comercio que priorizan los beneficios sobre los derechos humanos; y la falta de aplicación del principio de que quien contamina paga, ampliamente respaldado. Otro problema es el incumplimiento, desde hace tiempo, del compromiso asumido por los Estados ricos de proporcionar asistencia para el desarrollo.

59. Según un informe reciente, los Estados gastan al menos 1,8 billones de dólares anuales en subvenciones para el uso de combustibles fósiles, la agricultura industrial, la minería, la deforestación, la sobrepesca y otras actividades que agravan la crisis

³³ OCDE, "Closing the SDG financing gap in the COVID-19 era", nota temática para el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Grupo de los 20.

³⁴ OMS y ONU-Agua, *National Systems to Support Drinking-Water, Sanitation and Hygiene: Global Status Report 2019* (Ginebra, 2019).

³⁵ Climate Policy Initiative, *Global Landscape of Climate Finance 2021*.

³⁶ PNUMA, *Adaptation Gap Report 2021*.

³⁷ Véase OCDE, "Closing the SDG financing gap".

³⁸ Véanse Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 3, relativa a la índole de las obligaciones de los Estados partes (art. 2, párr. 1, del Pacto) (1990), e International Bar Association, "The obligation to mobilize resources: bridging human rights, Sustainable Development Goals and economic and fiscal policies" (2017).

climática, fomentan la contaminación o dañan la naturaleza³⁹. Otras estimaciones de las subvenciones perversas son incluso más elevadas, pero incluyen externalidades como los costos sanitarios y ambientales de la contaminación atmosférica, que no implican un gasto público directo.

60. Se calcula que la evasión fiscal (no pagar o pagar insuficientemente los impuestos de forma ilegal) y la elusión fiscal (organizar los asuntos financieros, dentro de la ley, para minimizar la responsabilidad fiscal utilizando lagunas y paraísos fiscales, entre otras cosas) cuestan a los Gobiernos entre 500.000 y 600.000 millones de dólares en impuestos sobre sociedades perdidos y 200.000 millones de dólares en impuestos sobre personas físicas perdidos anualmente⁴⁰.

61. Existe un acuerdo generalizado sobre el principio de que quien contamina paga, lo que significa que a los responsables de las emisiones de carbono y otros tipos de contaminación se les debería exigir que pagaran una cuota justa por los daños que causan sus acciones. En 2017, la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono concluyó que limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C requeriría niveles de precios del carbono de entre 40 y 80 dólares por tonelada. La tarificación del carbono está respaldada por el PNUMA y el Fondo Monetario Internacional⁴¹.

62. La mayoría de los acuerdos internacionales de inversión no solo no abordan eficazmente los problemas ambientales, sino que tratan los derechos de las empresas como algo más importante que los derechos humanos⁴². Estos tratados ofrecen a los inversores extranjeros una protección especial y el acceso a mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados. La industria de los combustibles fósiles es especialmente litigiosa, ya que ha llevado a los tribunales internacionales de arbitraje más de 230 casos en los que ha afirmado que las medidas adoptadas por los Gobiernos han disminuido el valor de sus inversiones. Las empresas de combustibles fósiles han tenido éxito en casi el 75 % de los casos, lo que ha obligado a los Gobiernos a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones⁴³. El importe medio de la indemnización concedida en los casos de combustibles fósiles (más de 600 millones de dólares) es casi cinco veces superior a la concedida en los casos de combustibles no fósiles. Los Gobiernos que actúan para cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París pueden ser responsables del pago de cientos de miles de millones de dólares en futuros casos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, lo que desalienta la acción climática⁴⁴. Otro estudio estimó que los inversores extranjeros podrían utilizar la Carta Europea de la Energía para demandar a los Gobiernos y pedirles 1,3 billones de euros hasta 2050 en concepto de

³⁹ Doug Koplow y Ronald Steenblik, *Protecting Nature by Reforming Environmentally Harmful Subsidies: The Role of Business* (2021). Se puede consultar en https://www.earthtrack.net/sites/default/files/documents/EHS_Reform_Background_Report_fin.pdf.

⁴⁰ Nicholas Shaxson, "Tackling tax havens: the billions attracted to tax havens do harm to sending and receiving nations alike", Fondo Monetario Internacional, septiembre de 2019. Se puede consultar en <https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon>.

⁴¹ Iniciativa Financiera del PNUMA, documento de debate de Net-Zero Asset Owner Alliance sobre la tarificación del carbono por parte de los Gobiernos. Se puede consultar en <https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/FINAL-AOA-Discussion-paper-on-governmental-carbon-pricing.pdf>.

⁴² Véase Naciones Unidas, Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo, *Financing for Sustainable Development Report 2022* (Nueva York, 2022); véase también A/72/153.

⁴³ Lea Di Salvatore, *Investor-State Disputes in the Fossil Fuel Industry* (Winnipeg, International Institute for Sustainable Development, 2021).

⁴⁴ Kyla Tienhaara y otros, "Investor-State disputes threaten the global green energy transition", *Science*, vol. 376, núm. 6594, págs. 701 a 703.

indemnización por el cierre anticipado de instalaciones de carbón, petróleo y gas⁴⁵. Existe una contradicción profundamente preocupante entre las obligaciones de derechos humanos (y los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y los acuerdos de inversión que exigen a los Gobiernos que indemnicen a las empresas extranjeras por dejar de realizar actividades que agravan la crisis climática y provocan abusos de derechos humanos.

63. Los países en desarrollo han acumulado más de 11 billones de dólares en deuda externa (véase A/75/164, párr. 17). En 2020, los países del Sur Global gastaron un total de 372.000 millones de dólares en el servicio de la deuda⁴⁶. Más de la mitad de la deuda de los países de ingreso bajo se produce en condiciones no favorables. Algunos países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo destinan más del 15 % de los ingresos públicos anuales al servicio de la deuda⁴⁷. Al menos 14 Estados de África gastan más per cápita en el servicio de la deuda que en educación, sanidad y protección social juntas⁴⁸. Algunos Estados africanos, como Angola, Zambia y Zimbabwe, destinan más de la mitad de su presupuesto nacional al servicio de la deuda. La condicionalidad para beneficiarse del alivio de la deuda, impuesta a los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo por los países de ingreso alto y las instituciones financieras internacionales, a menudo socava los derechos humanos.

64. La carga de la deuda y la crisis climática están directamente vinculadas, por lo que el alivio de la deuda es un requisito previo para la acción climática en las naciones vulnerables. Después de que el huracán María dañara el 90 % de los edificios de Dominica, con un costo superior a tres veces el producto interno bruto nacional, la deuda de ese país se disparó al alza porque el Gobierno tuvo que tomar fondos prestados para reconstruir la infraestructura y mantener los servicios públicos. Muchos pequeños Estados insulares en desarrollo no pueden optar al alivio de la deuda o a la financiación en condiciones favorables debido a unos criterios estrictos y obsoletos que determinan la capacidad para conseguirlos (véase A/75/164). Tras los devastadores ciclones Idai y Kenneth, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestó a Mozambique 118 millones de dólares, en lugar de aliviar su deuda. En 2021, 34 de los países más pobres del mundo gastaron cinco veces más en el pago de la deuda que en proteger a su población del impacto climático⁴⁹.

65. La crisis climática está vinculada a la desigualdad económica. La mitad más pobre de la población mundial solo posee el 2 % de la riqueza mundial⁵⁰. En cambio, el 10 %

⁴⁵ Jennifer Rankin, "Secretive court system poses threat to Paris climate deal, says whistleblower", *The Guardian*, 3 de noviembre de 2021.

⁴⁶ Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, documento en respuesta a la invitación a enviar contribuciones sobre la reforma de la arquitectura de la deuda internacional y los derechos humanos formulada por la Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Se puede consultar en <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IEDebt/Int-debt-architecture-reform/Eurodad-input-IDAreform-EN.pdf>.

⁴⁷ Véase Naciones Unidas, Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo, *Financing for Sustainable Development Report 2022* (Nueva York, 2022), pág. 16.

⁴⁸ Bob Libert Muchabaiwa, "The looming debt crisis in Eastern and Southern Africa: what it means for social sector investments and children", documento de trabajo sobre política social de la Oficina Regional del UNICEF para África Oriental y Meridional (Nairobi, 2021).

⁴⁹ Véase Debt Justice, "Lower income countries spend five times more on debt than dealing with climate change", comunicado de prensa, 27 de octubre de 2021. Se puede consultar en <https://debtjustice.org.uk/press-release/lower-income-countries-spend-five-times-more-on-debt-than-dealing-with-climate-change>.

⁵⁰ Véase World Inequality Lab, *World Inequality Report 2022*. Se puede consultar en <https://wir2022.wid.world>.

más rico posee el 76 % de toda la riqueza. En cuanto a los ingresos, el 10 % más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52 % de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre de la población solo gana el 8,5 %. El 10 % de las personas más ricas son responsables de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la mitad más pobre de la humanidad solo genera el 12 % de las emisiones.

66. Hace 50 años, las naciones ricas prometieron destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto (INB) a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), lo que incluía entre el 0,15 % y el 0,20 % para los países menos adelantados. Este compromiso nunca se ha cumplido. Así, en 2021, los Estados ricos solo aportaron el 0,33 % del INB, lo que representó 179.000 millones de dólares⁵¹.

67. Se están realizando ciertos progresos. Recientemente, 136 países y territorios acordaron instituir un tipo mínimo mundial del impuesto sobre sociedades del 15 % y exigir a las empresas multinacionales que pagaran impuestos en los países donde hacen negocios⁵². En 2020, la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pusieron en marcha un marco de financiación en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Iniciativa del Grupo de los 20 de Suspensión del Servicio de la Deuda fue útil, pero solo cubrió una pequeña fracción de los pagos de la deuda a los que se enfrentaban los países pobres altamente endeudados. Lamentablemente, la mayor parte de los beneficios del alivio de la deuda de los acreedores públicos recae en acreedores privados, ya que estos últimos se niegan a proporcionar cualquier alivio de la deuda⁵³. La Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (resolución 69/313 de la Asamblea General, anexo) sigue siendo el mejor marco para financiar los Objetivos, pero no se está aplicando adecuadamente.

68. Los impuestos son una de las herramientas más poderosas de los Gobiernos. Son fundamentales para invertir en bienes públicos, hacer efectivos los derechos humanos y lograr un desarrollo sostenible. Los Gobiernos, guiados por las normas de derechos humanos, deberían utilizar la política fiscal para reducir las desigualdades extremas en la riqueza, generar ingresos suficientes para proporcionar servicios públicos y protección social adecuados, garantizar regímenes justos de regalías para las actividades extractivas y recompensar las actividades económicas que protegen, sostienen y restauran la naturaleza, y, al mismo tiempo, desalentar las actividades que producen emisiones de carbono, contaminación y daños ambientales (véase A/75/982, párr. 24). Estas políticas son necesarias para garantizar que los Estados cumplan su obligación de optimizar los recursos disponibles.

69. Para subsanar el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se deberían realizar siete acciones fundamentales, que se describen a continuación⁵⁴. Estas siete propuestas recaudarían unos 7 billones de dólares anuales que se invertirían en la acción climática, la promoción de los derechos humanos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (véase el cuadro siguiente). Se están estudiando muchas otras ideas (como un impuesto sobre las transacciones

⁵¹ Véase OCDE, “The global picture of official development assistance”, base de datos de la financiación para el desarrollo. Se puede consultar en <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/>.

⁵² Véase OCDE y Grupo de los 20, Declaración sobre la Solución de Dos Pilares para Abordar los Desafíos Fiscales Derivados de la Digitalización de la Economía, 8 de octubre de 2021. Se puede consultar en <https://www.oecd.org/tax/beps/declaracion-sobre-el-enfoque-de-dos-pilares-para-abordar-los-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-de-la-economia-octubre-2021.pdf>.

⁵³ Véase Joseph Stiglitz y Hamid Rashid, eds., “Averting catastrophic debt crises in developing countries”, Centre for Economic Policy Research, *Policy Insights*, núm. 104 (29 de julio de 2020).

⁵⁴ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *Estudio económico y social mundial 2012: En busca de nueva financiación para el desarrollo* (Nueva York, 2012).

monetarias internacionales), pero es vital, y de hecho una obligación jurídica, que los Estados tomen medidas ahora para aumentar la financiación de los Objetivos a fin de aplicar el máximo de recursos disponibles. También deben tomarse medidas para garantizar que los fondos adicionales se gastan de forma efectiva, eficiente y equitativa, adecuándose al enfoque basado en los derechos humanos expuesto en el presente informe.

Nuevos recursos para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(Dólares de los Estados Unidos)

<i>Nuevas fuentes de financiación</i>	<i>Monto</i>
Impuesto sobre el patrimonio a nivel mundial	2,5 billones
Reorientar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente	1,8 billones
Impuesto sobre el carbono a nivel mundial	1,0 billón
Reducir la evasión y la elusión fiscales	0,6 billones
Derechos especiales de giro para la acción climática	0,5 billones
Alivio de la deuda	0,4 billones
Cumplir los compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo	0,2 billones
Total	7,0 billones

Impuesto sobre el patrimonio

70. Un impuesto sobre el patrimonio ayudaría a reducir la desigualdad y las emisiones de carbono. A nivel mundial, 3,6 millones de personas tienen un patrimonio valorado en más de 5 millones de dólares, con un total combinado de 75 billones de dólares; 200.000 personas poseen más de 50 millones de dólares, con un patrimonio combinado de 36 billones de dólares; y casi 3.000 multimillonarios tienen un patrimonio combinado de 14 billones de dólares. Un impuesto anual sobre el patrimonio, con una estructura de tipos escalonados (impuesto del 2 % sobre el patrimonio de más de 5 millones de dólares; del 3 % sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares; y del 5 % sobre el patrimonio de más de 1.000 millones de dólares) permitiría recaudar 2,5 billones de dólares al año⁵⁵.

Reorientar las subvenciones

71. Los 1,8 billones de dólares que los Estados despilfarran en subvenciones perjudiciales para el clima y el medio ambiente deberían reasignarse a la energía renovable, el almacenamiento de energía, la conservación de la energía, la agricultura regenerativa, la restauración de los ecosistemas y otras actividades respetuosas con el medio ambiente. Esta reasignación se menciona en las metas 12.c (subsidios a los combustibles fósiles) y 14.6 (subvenciones a la pesca) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

⁵⁵ Oxfam y otros, "Taxing extreme wealth: an annual tax on the world's multi-millionaires and billionaires: what it would raise and what it could pay for", informe temático. Se puede consultar en <https://www.fightinequality.org/sites/default/files/2022-01/Taxing-Extreme-Wealth-What-It-Would-Raise-What-It-Could-Pay-For.pdf>.

Impuesto sobre el carbono

72. Todas las emisiones de gases de efecto invernadero deberían ser gravadas. El Banco Mundial señala que, hasta la fecha, 64 países, regiones y Estados han puesto en marcha iniciativas de tarificación del carbono, que cubren el 16 % de las emisiones de carbono, mientras que se están aplicando políticas que cubren un 7 % adicional de las emisiones (incluido el programa de China de comercio de los derechos de emisión). Un impuesto sobre el carbono de 40 dólares por tonelada, aplicado al 75 % de las emisiones anuales que actualmente no tienen precio, generaría 1,08 billones de dólares anuales⁵⁶. La meta 12.c de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refiere a la reestructuración de la fiscalidad en relación con los combustibles fósiles.

Reducir la evasión y la elusión fiscales

73. Se requiere una mayor cooperación internacional para hacer frente a la evasión y la elusión fiscales, la competencia fiscal desleal, el traslado de beneficios, el blanqueo de dinero y los flujos financieros ilícitos, todo lo cual socava la capacidad de los Estados para movilizar recursos a fin de hacer efectivos los derechos humanos y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países ricos deben liderar la acción. El acuerdo internacional para implantar un tipo mínimo mundial del impuesto sobre sociedades para 2023 es un paso en la dirección correcta, pero debe aplicarse de forma efectiva.

Derechos especiales de giro

74. Se han presentado varias propuestas relacionadas con la emisión de derechos especiales de giro (DEG) del FMI. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo presentó una propuesta de 1 billón de dólares en DEG para los países en desarrollo, mientras que la Primera Ministra de Barbados pidió DEG por valor de 500.000 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años. El FMI está utilizando los DEG para crear un fondo fiduciario de 50.000 millones de dólares para la resiliencia y la sostenibilidad, pero un destacado crítico señaló que “para alcanzar la escala necesaria necesitamos añadir un cero más, hacerlo anual, y permitir que los inversores privados compitan para acceder a estos fondos en función de en qué medida pueden mitigar los efectos del clima y adaptarse a ellos en todo el mundo”⁵⁷.

Alivio de la deuda

75. La deuda y el servicio de la deuda son insostenibles si los Estados se quedan sin fondos suficientes para avanzar en que se hagan efectivos los derechos humanos o para garantizar el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debería proporcionarse inmediatamente un alivio de la deuda de hasta 400.000 millones de dólares anuales a los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo, así como a otras naciones vulnerables al clima, para que esos fondos puedan

⁵⁶ Véase Agencia Internacional de Energía, “Global CO₂ emissions rebounded to their highest level in history in 2021”, comunicado de prensa, 8 de marzo de 2022. Se puede consultar en <https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021>. A saber, 75 % de las emisiones mundiales x 36.000 millones de toneladas x 40 dólares/tonelada = 1,08 billones de dólares.

⁵⁷ Véase Avinash Persaud, “Saving Paris: an economically efficient and equitable rescue plan”, VOXEU, 2 de noviembre de 2021. Se puede consultar en <https://voxeu.org/article/saving-paris-economically-efficient-and-equitable-rescue-plan>.

destinarse a la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la consecución de los Objetivos, de acuerdo con la meta 17.4⁵⁸.

Compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo

76. Los Estados ricos deberían cumplir su compromiso de larga data de alcanzar las metas del 0,7 % del INB para los países en desarrollo y del 0,15 % al 0,20 % del INB para los países menos adelantados. Esta acción, coherente con la meta 17.2, produciría alrededor de 200.000 millones de dólares de fondos adicionales al año. Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia cumplen o superan sistemáticamente la meta del 0,7 %, lo que demuestra que es posible alcanzarla.

VII. Buenas prácticas

77. Debido a las limitaciones de espacio, no ha podido incluirse en el presente informe la sección relativa a las buenas prácticas (véase el anexo II)⁵⁹.

VIII. Conclusión y recomendaciones

78. Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, los Estados deberían aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a todos los aspectos relacionados con la mejora de la calidad del aire, la garantía de disponer de agua potable en cantidad suficiente, la aceleración de una acción climática ambiciosa para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, el saneamiento de la economía, el cambio a un sistema alimentario sostenible, y la conservación, protección y restauración de ecosistemas saludables y de la biodiversidad. Por ejemplo, es esencial un enfoque de la conservación basado en los derechos para garantizar que la designación y la gestión de las zonas terrestres, de agua dulce y marinas protegidas no violen los derechos de los pueblos indígenas, los campesinos, los afrodescendientes o las comunidades locales que dependen de la naturaleza. Un enfoque basado en los derechos humanos para prevenir la exposición a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas podría salvar millones de vidas cada año, al tiempo que evitaría miles de millones de episodios de enfermedad y generaría billones de dólares en beneficios.

79. Si no empleamos un enfoque basado en los derechos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer frente a la emergencia climática, proteger la biosfera y sanear la economía mundial, los niños de hoy y las generaciones futuras vivirán en un mundo ecológicamente empobrecido, privado de las contribuciones fundamentales de la naturaleza al bienestar humano, desgarrado por injusticias ambientales cada vez más profundas y asolado por pandemias cada vez más frecuentes. Por el contrario, si colocamos los derechos humanos y la naturaleza en el centro del desarrollo sostenible y logramos transformar la sociedad, la humanidad podría alcanzar un futuro justo y

⁵⁸ La meta 17.4 indica lo siguiente: “Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo”.

⁵⁹ El anexo II se puede consultar en <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-environment/annual-thematic-reports-special-rapporteur-human-rights-and-environment>; véase también A/HRC/43/53.

sostenible en el que las personas lleven una vida feliz, saludable y satisfactoria en armonía con la naturaleza.

80. Para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados deberían:

a) Incorporar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible a todos los niveles (mundial, regional y nacional), incluso en un instrumento mundial jurídicamente vinculante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las constituciones, legislaciones y políticas nacionales;

b) Reconocer que los Objetivos se asientan sobre una base sólida constituida por el derecho de los derechos humanos y establecen obligaciones jurídicamente vinculantes;

c) Dar prioridad a las acciones que, simultáneamente, logren múltiples Objetivos y hagan efectivos múltiples derechos humanos (por ejemplo, iniciativas de restauración ecológica, como la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara y el Sahel, que reducen la pobreza, mejoran la seguridad alimentaria, proporcionan acceso a energía limpia, protegen la naturaleza y hacen frente al cambio climático);

d) Adoptar medidas urgentes para proteger a los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente;

e) Acelerar las acciones necesarias para hacer frente a la emergencia climática mundial, incluida la eliminación progresiva del carbón (suprimiendo el uso del carbón para generar electricidad para 2030 en los Estados de ingreso alto, para 2040 en los Estados de ingreso mediano alto y para 2050 en todos los demás Estados), del petróleo y del gas natural (incluso no concediendo más permisos para la exploración de petróleo y gas o la expansión de la infraestructura en los Estados de ingreso alto, con efecto inmediato);

f) Garantizar que un enfoque basado en los derechos esté en el centro del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y sustituir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas a la biodiversidad que expiraron en 2020 por nuevas metas;

g) Adecuar todos los estímulos económicos proporcionados por la labor de recuperación de la COVID-19 a los objetivos climáticos de París y la transición a la energía renovable;

h) Establecer marcos jurídicos sólidos para prevenir, investigar y enjuiciar eficazmente la corrupción relacionada con el medio ambiente y el clima, incluidos los casos de explotación y destrucción de recursos naturales renovables y no renovables;

i) Dirigidos por el Grupo de los 20, aplicar las medidas necesarias para subsanar el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos un impuesto sobre el patrimonio a nivel mundial, la reasignación de las subvenciones perjudiciales para el clima y el medio ambiente, un impuesto sobre el carbono a nivel mundial, la adopción de medidas enérgicas contra la evasión y la elusión fiscales, derechos especiales de giro para la acción climática, un generoso alivio de la deuda y el cumplimiento de los compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo;

j) Negociar la eliminación de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados de los acuerdos internacionales de

comercio e inversión o poner fin a estos (porque dichos mecanismos impiden a los Estados adoptar medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación);

k) Reunir, analizar y publicar datos estadísticos fiables y desglosados, incluido el desglose por raza o etnia, para cada Objetivo, meta e indicador pertinente de la Agenda 2030;

l) Informar de forma transparente sobre el gasto en los Objetivos, así como en el servicio de la deuda;

m) Utilizar el examen periódico universal para evaluar la actuación de los Estados con miras a respetar, proteger, hacer efectivo y promover el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y lograr los Objetivos;

n) Coordinar los procedimientos de presentación de informes sobre derechos humanos (por ejemplo, el examen periódico universal) con los informes sobre los Objetivos (por ejemplo, los exámenes nacionales voluntarios)⁶⁰;

o) Garantizar que los marcos de desarrollo sostenible posteriores a 2030 incorporen explícitamente los derechos humanos en todos los objetivos y metas, proporcionando mayor claridad y certidumbre a los titulares de derechos y a los titulares de obligaciones.

81. Los Estados de ingreso alto, principales causantes de la triple crisis planetaria, tienen una responsabilidad especial en cuanto a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y aplicar y financiar soluciones. Por lo tanto, dichos Estados deben:

a) Aumentar los flujos de financiación a los países de ingreso bajo, los países de ingreso mediano bajo y los pequeños Estados insulares en desarrollo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la conservación de la biodiversidad, la acción climática y las pérdidas y daños;

b) Aumentar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo;

c) Ampliar la transferencia de tecnología y la cooperación;

(d) Implantar un índice de vulnerabilidad multidimensional para los pequeños Estados insulares en desarrollo a fin de ayudar a satisfacer sus necesidades de financiación singulares;

e) Aprobar metas y políticas nacionales para hacer frente a los efectos adversos de su consumo sobre otros Estados, lo que incluye:

i) Detener todas las exportaciones de desechos de equipo eléctricos y electrónicos, residuos plásticos, plaguicidas altamente peligrosos y otras sustancias tóxicas a los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo;

ii) Hacer que los parámetros basados en el consumo formen parte de las estadísticas oficiales y tomar medidas tangibles para reducir el consumo insostenible, incluso mejorando las dietas (predominantemente de origen vegetal) y reduciendo el consumo de materiales;

iii) Incluir sistemáticamente los efectos indirectos internacionales en los exámenes nacionales voluntarios;

⁶⁰ Véase OCDE, recomendación del Consejo sobre la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, documento OECD/LEGAL/0381.

iv) Reforzar la regulación de las empresas abarcando toda la cadena de suministro, mediante una legislación de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

82. Todas las instituciones financieras internacionales deberían:

a) Acelerar y normalizar las políticas de exclusión de los combustibles fósiles;

b) Llevar a cabo evaluaciones de los efectos de los programas propuestos en los derechos humanos y realizar análisis de sostenibilidad de la deuda basados en los derechos humanos;

c) Proporcionar un amplio alivio y reestructuración de la deuda y dar prioridad a las subvenciones y préstamos en condiciones favorables a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a otros países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo vulnerables al clima;

d) Evitar la imposición de programas de ajuste estructural y la exigencia de austeridad como condiciones para obtener alivio de la deuda, subvenciones o préstamos.

83. Para cumplir su responsabilidad de respetar el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, contribuyendo al mismo tiempo a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las empresas deberían:

a) Apoyar la aplicación de enfoques de los Objetivos basados en los derechos humanos;

b) Cerciorarse de que todas las inversiones, proyectos y políticas están claramente en consonancia con la aceleración del progreso hacia el logro de los Objetivos;

c) Contribuir a la labor encaminada a lograr el objetivo de una economía circular libre de contaminación y apoyar dicha labor;

d) Reducir el uso de energía y acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables y el almacenamiento de energía;

e) Reducir las repercusiones negativas sobre los ecosistemas y la biodiversidad de sus propias actividades, productos, servicios, filiales y proveedores;

f) Llevar a cabo un análisis exhaustivo de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente antes de iniciar nuevos proyectos, elaborar nuevos productos o entrar en nuevos mercados.

84. Otros procedimientos especiales han formulado excelentes recomendaciones relacionadas con los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (A/HRC/50/60), el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/75/181/Rev.1), la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación (A/74/164), el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos (A/HRC/41/49) y otros⁶¹.

85. Tal y como concluyó el Secretario General en su informe de 2021 sobre los progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la humanidad necesita “un decenio de actividad verdaderamente transformadora

⁶¹ Véase <https://www.ohchr.org/es/special-procedures-human-rights-council/cross-cutting-thematic-issues>.

que obre en beneficio de las personas y el planeta” (véase [E/2021/58](#), párr. 7). Se necesitan cambios audaces, decisivos y sistémicos a todos los niveles para evitar un decenio perdido para el desarrollo sostenible, que ni las personas ni el planeta pueden permitirse. Si se combinan, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen un cambio de paradigma sinérgico que se aleja del modelo tradicional de explotación propio del desarrollo económico y proporciona una visión inspiradora centrada en las personas y el planeta, en la que tanto las generaciones presentes como las futuras puedan disfrutar plenamente de su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
